



COLUMNA

Cristian M. Cárdenas Aguilar, achaíno, profesor de Ciencias Sociales y magíster en Economía y Gestión Regional ccardag@gmail.com



Política y coherencia: un imperativo elemental para nuestra democracia II

Ayer inicié esta columna en medio del alza de los combustibles anunciada por el gobierno de turno, junto con medidas de recorte fiscal y discursos centrados en la austeridad. Hay una condición clave para que ese mensaje tenga legitimidad: la coherencia.

Existe una percepción extendida de que las remuneraciones de los personeros son excesivas y de que ser parte del Estado resulta del todo "rentable". Hacerse cargo de ello sería una señal clara, al menos desde el punto de vista ético.

Lo mismo ocurre con los beneficios asociados a diplomáticos, embajadas, asignaciones de transporte para autoridades y los sueldos vitalicios de expresidentes de la República.

El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores contempla cientos de miles de

millones de pesos anuales destinados al funcionamiento de embajadas y consulados, con altos costos en personal, infraestructura y representación, por solo mencionar algunos casos de uso de recursos públicos que rara vez entran en el debate con la misma intensidad que las exigencias dirigidas a la ciudadanía.

Evidentemente, medidas de este tipo no resuelven de raíz el problema de los combustibles. Sin embargo, su valor radica en la señal de demostrar que el esfuerzo es compartido, fortalecer la confianza y dar sustento a decisiones difíciles. La clase política difícilmente se verá afectada por las medidas anunciadas por el Gobierno, pero sí lo harán la clase media y el ciudadano común, quienes, a través de sus impuestos, financian parte de estos

privilegios. ¿No sería, entonces, un acto coherente prescindir, al menos parcialmente, de ellos?

En un escenario marcado por la desconfianza generalizada hacia la clase política, liderar y representar a la ciudadanía con el ejemplo deja de ser deseable y se vuelve imprescindible. Sin la aludida coherencia, cualquier argumento corre el riesgo de reducirse a simple palabrería. Pero, además, esta incoherencia tiene efectos profundos erosionando la convivencia social, alimentando la dañina polarización y agudizando los desequilibrios socioeconómicos entre quienes toman decisiones y quienes deben asumir sus costos. En ese sentido, no se trata solo de un problema ético, sino de una deuda directa con nuestra democracia representativa.